

|                                     |  |                               |   |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| <b>Fecha Sanción</b>                | 11 Nov. 1976   | <b>Decreto Reglamentación</b> | 0 |
| <b>Fecha Promulgación</b>           | 11 Nov. 1976   | <b>Decreto Promulgación</b>   | 0 |
| <b>Publicada en Boletín Oficial</b> | N° 96-30/11/76 - Pág. 2198/202<br>3976 Poder Judicial - Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios.-<br>3527 Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios - Modificase art. 3° de la Ley N° 3144 modificada por Ley N° 3331.-<br>3331 Corte de Justicia - Modifícanse Artículos de la Ley N° 3144.- |                               |   |
| <b>Modificado por</b>               | 2225 Corte de Justicia - Enjuiciamiento a funcionarios.-   |                               |   |
| <b>Modifica a</b>                   | 2225 Corte de Justicia - Enjuiciamiento a funcionarios.-   |                               |   |
| <b>Tema</b>                         | LEYES VARIAS   |                               |   |
| <b>Extracto</b>                     | Corte de Justicia - Enjuiciamiento a magistrados y funcionarios.-  |                               |   |

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Los Ministros de la Corte de Justicia, el Procurador General de la misma, los Jueces de la Cámara de Apelación, Tribunal de Sentencia en los Penal, Jueces de Instrucción, Jueces en lo Civil, Jueces de Paz Letrados, Jueces del Trabajo, Fiscales y Defensores Generales de todos los fueros, sólo podrán ser separados de sus funciones mediante el procedimiento previsto en las disposiciones de la presente Ley.

ARTICULO 2º.- El Tribunal de enjuiciamiento de los Ministros de la Corte de Justicia y del Procurador General se integrará con tres (3) ex-Ministros de la Corte de Justicia que se hayan desempeñado en el cargo no menos de dos (2) años y por (2) abogados del foro de la Provincia con más de cinco (5) años de ejercicio de la profesión y de tres (3) años de domicilio real en la misma.

ARTICULO 3º.- Los miembros integrantes del Tribunal de Enjuiciamientos previsto en el artículo anterior serán desinsaculados anualmente, en la última semana hábil del año judicial, de una lista que llevará la Corte de Justicia. Durante Diez (10) días hábiles a partir de la desinsaculación podrán ser impugnados por las causales que obsten al desempeño de la magistratura. El Presidente del Tribunal y el Sustituto para el año 1976, será designado dentro de los diez (10) días de sancionada la presente Ley.

ARTICULO 4º.- La presidencia del Tribunal de Enjuiciamiento previsto en el Art. 2º será desempeñada por el miembro de mayor edad entre los tres (3) integrantes ex-Ministros de la Corte de Justicia.

ARTICULO 5º.- Se desempeñará como fiscal ante el Tribunal de Enjuiciamiento a los miembros de la Corte, un abogado del foro local que acredite las mismas condiciones que las requeridas para integrar el Tribunal. Es condición de inhabilidad para el ejercicio de la función de fiscal el desempeño de cargos rentados en la Administración Pública Provincial.

ARTICULO 6º.- Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento y el Fiscal durarán dos (2) años en el desempeño de sus funciones y podrán ser reelegidos. Desinsaculados que fueren los nombres, en la forma establecida en el art. 3º, el Poder Ejecutivo promoverá a la designación por Decreto de los integrantes del Jurado.

ARTICULO 7º.- El Poder Ejecutivo designará, en la misma oportunidad y mediante el procedimiento de sorteo previo dos (2) ex-Jueces de la Corte de Justicia y dos (2) abogados que actuarán como sustitutos para el caso de impedimento de los integrantes del Tribunal o del Fiscal. Los sustitutos deberán reunir las mismas condiciones que los titulares.

ARTICULO 8º.- El Tribunal de Enjuiciamiento tendrá su sede en la Sala de Audiencias de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca. Como Secretario del mismo se desempeñará un Secretario de la Corte de Justicia que resulte desinsaculado por el Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento. El Secretario que resultare designado no podrá volver a serlo en proceso subsiguiente, debiendo las nuevas designaciones realizarse sin su participación.

ARTICULO 9º.- El Tribunal de Enjuiciamiento para el resto de los magistrados mencionados en el art. 1º se integrará con uno de los Ministros de la Corte de Justicia por sorteo realizado, por un miembro de la Cámara de Apelación, un miembro del Tribunal de Sentencia en lo Penal y por dos (2) abogados del foro de la Provincia con no menos de cinco (5) años de ejercicio de la profesión y tres (3) años de domicilio real en la misma. Tanto los magistrados como los abogados serán designados por sorteo público a practicarse por la Corte de Justicia. Para el caso de que el enjuiciado fuera un miembro del Tribunal de Sentencia en lo Penal o de la Cámara de Apelaciones, los magistrados integrantes del Tribunal no podrán ser del mismo fuero del imputado. La presidencia del Tribunal de Enjuiciamiento será ejercida por el Ministerio de la Corte de Justicia integrante del mismo.

ARTICULO 10º.- La función de fiscal ante el Tribunal previsto en el artículo anterior será desempeñada por un abogado que acredite las condiciones previstas en el art. 5º de esta ley.

ARTICULO 11°.- Como Secretario del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados Inferiores, actuará un Secretario de Juzgado que resulte sorteado públicamente de la lista que llevará la Corte de Justicia. El Secretario a designar no podrá ser del mismo fuero que el magistrado o funcionario enjuiciado.

ARTICULO 12°.- El magistrado o funcionario encausado en cualquiera de los Tribunales previstos en la presente Ley tendrá derecho a designar defensor, el que deberá ser abogado y acreditar su condición mediante la presentación del diploma universitario correspondiente emanado de universidad nacional, provincial o privada debidamente reconocida. En caso de que el imputado se negare a designar defensor, el mismo le será proporcionado de oficio mediante un abogado sorteado entre los inscriptos en la matrícula del Colegio de Abogados de la Provincia.

ARTICULO 13°.- Cualquiera de los integrantes de los Tribunales de Enjuiciamiento podrán ser recusados y deberán excusarse por las siguientes causales:

- a) Parentesco con el imputado hasta el cuarto (4º) grado de consanguinidad o segundo (2º) de afinidad.
- b) Ser acreedor o deudor del imputado.
- c) Enemistad manifiesta y grave con el imputado.
- d) Amistad íntima con el imputado, y en su caso con el denunciante.
- e) Haber intervenido en los hechos de causa o tener en su resultado.

ARTICULO 14°.- La recusación deberá plantearse por el encausado en la primera presentación; en la misma oportunidad ofrecerá la totalidad de la prueba en que fundare la misma. De la recusación interpuesta se correrá vista al recusado, quien en el término de 48 horas deberá constestarla ofreciendo, si lo considerare necesario, la prueba de descargo. Dentro de las 48 horas de contestada la recusación el Tribunal resolverá el incidente. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

ARTICULO 15°.- Las Fiscales y los Secretarios del Tribunal de Enjuiciamiento no podrán ser recusados, pero deberán excusarse cuando se encuentren comprendidos en algunas de las causales comprendidas en el artículo 13°. Oída que sea la recusación, el Tribunal resolverá de inmediato si acepta o no la misma. La resolución recaída no será suceptible de recurso alguna.

ARTICULO 16°.- Los defensores designados de oficio podrán excusarse cuando se encuentren comprendidos en las causales previstas en los incisos b), c) y e) del artículo 13°. El Tribunal resolverá el incidente en la forma prevista en el artículo anterior.

ARTICULO 17°.- Son causas de remoción de los funcionarios y magistrados mencionados en el artículo 1° las enunciadas por los artículos 216°, 217° última parte y 229° de la Constitución de la Provincia.

ARTICULO 18°.- Toda persona capaz que tenga conocimiento de la existencia de un hecho mencionado en el artículo anterior podrá denunciarlo. Si se tratare de un delito de instancia o de acción privada sólo podrá formular la denuncia quien se encuentre facultado para ejercer la acción respectiva por las disposiciones establecidas en el libro 1º del Título 11 del Código Penal. El denunciante no podrá ser parte en las actuaciones pero deberá comparecer cuantas veces el Tribunal le requiera su presencia.

ARTICULO 19°.- La denuncia se formulará por escrito, con firma del letrado, por ante el Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento. La misma deberá contener ineludiblemente los datos personales del denunciante, el domicilio real, la relación completa y circunstanciada de los hechos en que se fundare; como así también hará mención de la prueba que sirva para acreditarlo. Si se tratare de prueba documental la misma deberá acompañarse con el escrito de formulación de la denuncia. Las denuncias podrán ser formuladas también por ante la Corte de Justicia, la Cámara de Apelación o el Tribunal de Sentencia.

ARTICULO 20°.- La Autoridad que recibiere la denuncia hará ratificar en su presencia al denunciante el contenido de la misma dentro del plazo de cinco (5) días. Si el escrito no reuniere las exigencias previstas en el artículo anterior, dicha autoridad intimará a aquél a que cumpla con los requisitos formales establecidos.

Tanto la Corte de Justicia, la Cámara de Apelación y el Tribunal de Sentencia en lo Penal que recibieren denuncias, una vez cumplido lo previsto en el párrafo anterior, remitirán las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento que correspondiere dejando copia testimoniada de la misma.

ARTICULO 21°.- Si el escrito de formulación de denuncia no reuniera los requisitos establecidos en los artículos 19° y 20°, ello no será obstáculo para que la misma sea considerada siempre que contuviese una seria fundamentación de evidencia real de los hechos denunciados.

ARTICULO 22°.- El Tribunal de Enjuiciamiento que correspondiere podrá, aún de oficio, disponer la formación de causa respecto de los magistrados y funcionarios comprendidos en el artículo 1°. Del mismo modo podrán actuar los Ministros de la Corte de Justicia y los Jueces de la Cámara de Apelación y del Tribunal de Sentencia en lo Criminal, quienes podrán requerir del

Enjuiciamiento de sus componentes, Funcionarios y Jueces de Jerarquía inferior.

ARTICULO 23°.- Recibida la denuncia o el requerimiento de formación de causa el Tribunal de Enjuiciamiento, procederá a considerar:

- a) La denuncia recibida si ,sta fuese maliciosa o arbitraria la desechará sin más trámite por resolución fundada, e impondrá al denunciante y a su letrado patrocinante una multa que no podrá exceder de \$ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL) o arresto de hasta dos (2) meses sin que ello sea óbice para eximirlo de la responsabilidad penal que pudiese corresponderle.
- b) Si la denuncia fuese a prima facie admisible, el Tribunal, en el más breve lapso de tiempo, oír al imputado a quien podrá requerir un informe escrito.

Cumplidos los recaudos precedentes, y previa vista al Fiscal, el Tribunal se expedirá por resolución fundada, estableciendo en forma exclusiva si corresponde dar curso a la denuncia formulada o rechazarla. El fiscal, al expedirse, deberá hacerlo en los mismos términos. La Resolución del tribunal será en todos sus términos inaplicable.

Para el caso de que la denuncia fuere rechazada, el Tribunal impondrá al denunciante y a su letrado las sanciones previstas en este artículo.

- c) Será rechazada también la denuncia formulada que contuviere hechos no previstos en la Constitución Provincial, aplicándosele al denunciante las sanciones previstas en este precepto.

ARTICULO 24°.- Si se hiciese lugar a la formación de causa, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá suspender al encausado en el ejercicio de sus funciones y tomará las medidas de seguridad que las circunstancias de hecho así lo exijan, de ello, deberá dar conocimiento a la Corte de Justicia. En el mismo auto correrá vista al Fiscal quien formulará la acusación y ofrecerá la prueba en un lapso no mayor de diez (10) días. Por el mismo término se dará traslado al encausado, para que formule su defensa y ofrezca la prueba de la cual intente valerse.

El Tribunal, mediante resolución fundada, rechazará las pruebas que a su juicio fuere manifestamente impertinentes o superabundantes. Contra esta Resolución no cabrá recurso alguno.

ARTICULO 25°.- Cumplido que sea el artículo anterior, el Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento procederá a fijar audiencia, con anticipación no menor de seis (6) días hábiles, para que tenga lugar la vista de la causa.

Las citaciones se harán al Fiscal y al encausado y quienes serán intimados a concurrir provistos de todas las pruebas de que intenten valerse. Asimismo se citará a los testigos, peritos y demás personas cuya presencia sea requerida por el Fiscal o el imputado al ofrecer la prueba, so pena de ser conducido por la fuerza pública si se negaran a ello. En la misma citación se le hará saber al enjuiciado que deberá presentarse con sus defensores, que no podrán exceder de dos (2), bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere se procederá acorde a lo previsto en el artículo 12° de la presente Ley in fine.

Si no compareciere a la audiencia el encausado o sus defensores, ello no será factor de postergación de la misma ni suspenderá el juicio, dándose intervención en el acto al defensor de oficio. Cuando los testigos, que debieren comparecer, no residieren en el lugar de la audiencia, el Tribunal fijará la indemnización correspondiente si ,stos la solicitaren.

ARTICULO 26°.- Abierto el juicio, el debate será oral y público. No obstante el Tribunal podrá resolver de Oficio que el mismo tenga lugar total o parcialmente a puertas cerradas, cuando razones de orden, moralidad o reserva de interés público así exijan. La resolución a esos efectos deberá ser debidamente fundada.

La vista de la causa continuará en audiencias diarias hasta su determinación, pudiendo suspender solamente cuando circunstancias extraordinarias o inesperadas impidan su prosecución o fuere necesario el cumplimiento de alguna diligencia fuera de la Sede del Tribunal. El Presidente del Tribunal dirigirá el debate guardando el buen orden del mismo pudiendo imponer sanción de multa de hasta DOS MIL PESOS (\$ 2.000) o arresto de hasta quince (15) días al Fiscal, al encausado o a sus defensores, sin que ello lo releve de la obligación de concurrir a los actos de la causa.

Asimismo el Presidente del Tribunal podrá expulsar del recinto a cualquier persona que fuere factor de perturbación y podrá imponer a la misma cualquiera de las sanciones previstas en este artículo.

ARTICULO 27°.- Iniciado el debate, se procederá a dar lectura a la acusación fiscal y a la defensa, seguidamente se recibirán todas las pruebas, incluida la declaración del encausado, sin juramento. En su caso el Presidente del Tribunal podrá disponer los cargos que considere necesarios.

Los vocales del tribunal, a trav,s del Presidente podrá preguntar y repreguntar a los testigos y peritos.

El Presidente del Tribunal de enjuiciamiento deberá, a petición de parte o aún de oficio, rechazar las preguntas que a su juicio resultaron subjetivas o capciosas. De dicha resolución no cabrá recurso alguno.

ARTICULO 28°.- Si durante el curso del debate resultare un hecho no mencionado en la acusación, el fiscal podrá ampliarla. Presentándose este caso, el Presidente del Tribunal informará al encausado que tiene derecho para solicitar la suspensión de la audiencia a los fines de preparar su defensa con referencia el hecho nuevo y ofrecer la prueba de la que intentare valerse. Si este derecho fuere ejercido por el encausado, el Tribunal de enjuiciamiento deberá suspender el debate por un plazo no inferior a Cinco

(5) días.

ARTICULO 29°.- Una vez concluída la recepción de la prueba, el Presidente concederá la palabra en forma sucesiva al fiscal y a la defensa, pudiendo ,stos replicarse una sola vez.

Por último, el Presidente preguntará al encausado si desea o tiene algo más que manifestar y, oído que fuera, cerrará en forma definitiva el debate.

ARTICULO 30°.- El acta del debate será labrada por el secretario actuante sobre la base de la versión taquigráfica. Firmarán el acta los miembros del tribunal, el fiscal, el encausado, los defensores y el secretario. La firmarán también los testigos, peritos y personas que hayan comparecido si estuvieran presentes en el acto.

ARTICULO 31°.- Antes del cierre del debate y si fuere necesario el Tribunal dispondrá las medidas para mejor proveer que considere oportunas.

ARTICULO 32°.- El Tribunal deliberará en sesión secreta y apreciará las pruebas conforme con las reglas de la sana crítica. Asimismo siempre sesionará en pleno y su pronunciamiento deberá ser por mayoría absoluta de sus miembros.

ARTICULO 33°.- El Tribunal dictará sentencia en un plazo no mayor de diez días la cual deberá ser debidamente fundada. Si la sentencia fuere condenatoria no tendrá otro efecto que de disponer la remoción del encausado e inhabilitarlo para ocupar en el futuro otro cargo oficial.

Si la remoción fuere fundada en hechos que pudieren constituir delitos de acción pública, o si ello resultare en forma manifiesta de la prueba, se dará intervención en forma inmediata a la justicia en lo penal, remitiéndosele copia autenticada de las constancias respectivas.

Si fuere absolutoria se procederá sin más trámites a reintegrar al encausado a sus funciones. La sentencia será notificada al fiscal, al encausado y a sus defensores, y se comunicará la misma a la Corte de Justicia.

Contra ella no habrá lugar a recurso alguno, con excepción del de aclaratoria, el que deberá ser interpuesto dentro de las veinticuatro horas de notificada.

La sentencia absolutoria, podrá ser publicada y difundida cuando el Tribunal lo considere necesario o lo hubiere pedido el encausado.

ARTICULO 34°.- Finalizada la causa el Tribunal procederá a regular de oficio los honorarios de los letrados, peritos, intérpretes y demás auxiliares que hubieren tenido intervención; deberá asimismo pronunciarse sobre toda otra cuestión incidental que estuviere pendiente.

Si de la sentencia hubiera recaído condena para el encausado, las costas serán a su cargo, salvo que el Tribunal, por circunstancias del caso, dispusiere otra manera de satisfacerlas. Si por el contrario la sentencia fuese absolutoria las costas las pagará el fisco.

Los honorarios regulados y firmas podrán ser susceptibles de ejecución de conformidad a las normas procesales vigentes.

ARTICULO 35°.- Todo traslado, vista, resolución o dictamen fiscal que no tuviere plazo fijado deberá producirse en el de tres días.

ARTICULO 36°.- El encausado que, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, hubiere sido suspendido de sus funciones, percibirá el SETENTA POR CIENTO (70%) de sus haberes, procediéndose a trabar embargo sobre el resto a las resultas del juicio.

Si hubiere resultado absuelto le será reintegrado la totalidad de lo embargado.

ARTICULO 37°.- Supletoriamente serán aplicables las disposiciones que prescribe el Código de Procedimiento Penales de la Provincia.

ARTICULO 38°.- Derógase la Ley N° 2225 y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

ARTICULO 39°.- Comuníquese, publíquese, d,se al Registro Oficial y Archívese.-

Cnl. JORGE CARLUCCI  
Gobernador de la Provincia

Dr. Aldo Cesar Hugo Nieva  
Ministro de Economía  
a/c Ministerio de Gobierno